

Nombre completo: Martín Pezzarini

Filiación institucional: Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales

País de procedencia: Argentina

La crisis política en Brasil

Introducción

El 3 de diciembre de 2015, el entonces presidente de la Cámara de Diputado de Brasil, Eduardo Cunha, aceptó uno de los pedidos de impeachment contra la presidente del país. Dilma Rousseff era acusada de emitir decretos que alteraban el presupuesto y de tomar préstamos de la banca pública sin autorización del Congreso. Finalmente, nueve meses más tarde, al no conseguir el apoyo político que necesitaba en ambas cámaras, Dilma terminó siendo desplazada del poder.

Este episodio tuvo lugar en el marco de la enorme crisis política que atraviesa Brasil desde el año 2013. En todo el país se venían desarrollando grandes movilizaciones como respuesta al ajuste fiscal que estaba imponiendo el gobierno de Dilma y a las revelaciones sobre el esquema de corrupción en torno a Petrobras, las cuales involucraban a todo el arco partidario burgués. Las protestas pusieron en evidencia una profunda fisura en la relación entre representantes y representados. Frente a este escenario, los intentos de la burguesía por recomponer ese vínculo generaron cambios y rupturas al interior del personal político que fueron leídos como la supuesta avanzada de fuerzas conservadoras en el país. La “derecha” local, representada por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), habría desplazado al Partido de los Trabajadores (PT) apelando a maniobras ilegítimas y antidemocráticas, lo cual le permitiría avanzar sobre las conquistas que la clase obrera brasileña obtuvo bajo los gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2010-2016). Lejos de esta interpretación, el presente trabajo intenta demostrar que en Brasil se ha abierto una crisis política como consecuencia del ajuste que comenzó a imponer el gobierno de Dilma y de las revelaciones sobre la corrupción que atraviesa al personal político en su conjunto.

En el primer apartado se examinarán brevemente los principales aspectos de la economía brasileña y se intentará dilucidar las causas profundas de su crisis. En segundo lugar, se analizarán las condiciones de vida de la clase obrera bajo los gobiernos del PT, considerando los salarios que percibieron los trabajadores brasileños y la importancia que asumieron las transferencias del estado en la reproducción de sus vidas. Habiendo realizado esta aproximación, se pasará a examinar la crisis política que

se abrió en el país. Se analizarán las movilizaciones que tuvieron lugar a partir del año 2013, evaluando los factores que las provocaron, los reclamos que se enarbolaron, las organizaciones que las dirigieron y las limitaciones que encontraron. Por último, se exponen las conclusiones y se presenta un balance conciso del recorrido realizado.

La economía brasileña

En los últimos años, Brasil ha sido presentado como una economía, destinado a convertirse en un actor de peso en el nuevo contexto internacional. No obstante, en poco tiempo, la crisis capitalista ha echado por tierra esas quimeras. En los años 2015 y 2016, la economía brasileña se desplomó y atravesó la peor recesión de sus últimas tres décadas. Frente a este panorama, se formularon diferentes explicaciones y se identificaron diversas causas. Se apuntó contra la inflación, la corrupción desmedida, la extensión de los planes sociales o la relación comercial con China. Ahora bien, en la medida que solo hacen referencia a algunos de los aspectos constitutivos de la coyuntura actual, todas estas formulaciones ofrecen una explicación parcial del proceso y, en consecuencia, no logran dilucidar el problema de fondo: la estructura de la economía brasileña. Es aquí donde se encuentra la raíz de la crisis que sacude actualmente al gigante sudamericano. Será preciso, entonces, examinar la evolución reciente de su economía y luego pasar al análisis de la situación política que se sostiene sobre esa base.

En el año 2002, el período de gobierno del PT se inició con una fuerte devaluación de la moneda local, lo cual condujo al tipo de cambio nominal a una subvaluación del 22%. Como resultado de ello, se deprimieron los salarios reales, así como también el costo laboral medido en dólares. Estos elementos, junto al aumento de los precios de los bienes agropecuarios y del petróleo crudo, constituyeron los pilares que permitieron mejorar los principales indicadores de la economía brasileña: el Producto Bruto Interno (PBI), el comercio exterior, la actividad industrial y el salario. Las exportaciones de commodities y, a partir del año 2006, el creciente endeudamiento externo, permitieron sostener el funcionamiento de diferentes industrias -muchas de ellas deficitarias-, así como también la expansión del gasto público orientado a la atención de sobrepoblación relativa.

Este cuadro comenzó a mostrar graves fisuras hacia 2012. El crecimiento de la economía se desaceleró y solo alcanzó un 1,9%, menos de la mitad del promedio que se

mantuvo durante esa década. Luego de que en 2014 el crecimiento haya sido prácticamente nulo (0,5%), en 2015 y 2016 la economía brasileña se desplomó y el PBI mostró una caída del 3,5% y 3,6% respectivamente. Por su parte, mientras en 2006 la balanza comercial arrojaba un superávit de 46 mil millones de dólares, en el año 2014 los buenos resultados desaparecieron y el déficit registrado se acercó a los 4 mil millones. Asimismo, el déficit fiscal primario se incrementó de manera firme y en 2015 trepó hasta los 27.800 millones de dólares, lo cual representó el 1,8% PBI. La industria también sufrió una contracción importante, especialmente en actividades claves como el sector de maquinarias agrícolas, la producción automotriz y comerciales livianos.

El origen de esta crisis está estrechamente ligado al fin del ciclo alcista de los precios de las commodities, que había constituido el principal impulso de las economías latinoamericanas de los últimos años. En efecto, lejos de la importancia que la prensa le otorga a la industria brasileña, el análisis del comercio exterior pone en evidencia el peso que guardan las mercancías primarias. En el año 2015, nueve de los diez principales productos de exportación eran de origen primario – soja, mineral de hierro, crudo, carne de pollo, residuos de soja, caña de azúcar, café, carne bovina, mijo, mineral), y juntos explicaron el 43% de las ventas al exterior. Además, de las veinte principales empresas de exportación que operan en el país, catorce desarrollan actividades ligadas al agro, la minería y la producción de petróleo. Cabe destacar que desde 2008-09 China se ha constituido en el principal destino de los productos brasileños, ocupando el lugar que hasta entonces le pertenecía al mercado norteamericano. Con todo, la desaceleración de la economía china tuvo un impacto negativo sobre sus compras a Brasil, y esa merma no fue compensada por la aparición de nuevos mercados.

Por su parte, pese a la importancia que revisten las exportaciones de bienes industriales, que explican aproximadamente un tercio del valor total, las manufacturas presentan un déficit comercial significativo, puesto que el 73% de las importaciones que entran al país pertenecen a este rubro. En el año 2014, el déficit del sector manufacturero ascendió a 89 mil millones de dólares, lo cual fue atenuado parcialmente por el superávit que se registró en el comercio de bienes primarios, que alcanzó los 74 mil millones. Ello pone en evidencia que la industria manufacturera brasileña es deficitaria y que, por lo tanto, los ingresos del comercio exterior se sostienen fundamentalmente por las exportaciones primarias. La raíz de este problema radica en el rezago de la

productividad laboral, puesto que ello retrasa a la industria brasileña en la competencia capitalista.

Dado este marco, las exportaciones de bienes primarios se constituyeron en la fuente de recursos que, junto al creciente endeudamiento externo, permitió sostener las operaciones de diferentes actividades industriales y la expansión del gasto social. Ahora bien, la disminución de los precios de las materias primas supuso un duro golpe sobre los ingresos del fisco. En consecuencia, frente a este escenario, lejos de las promesas que se proclamaron durante la campaña electoral, el gobierno de Dilma Rousseff terminó implementando un severo ajuste. Ese fue el inicio de la crisis política que se abrió en Brasil. No obstante, antes de analizar este proceso, resulta pertinente examinar algunos aspectos ligados a las condiciones de vida de la clase obrera brasileña durante los gobiernos del PT.

La situación de la clase obrera

La caída del desempleo, la reducción de pobreza, la suba de los salarios y la supuesta conformación de una nueva “clase media” son algunos de los logros que se asocian a los gobiernos del PT. Cabe indagar, pues, cuáles fueron realmente las condiciones de vida de la clase obrera durante estos años y sobre qué base se sustentaron las mejoras registradas.

En primer lugar, resulta pertinente destacar que la “distribución ingreso” que tuvo lugar en estos años solo consistió en una reducción de las desigualdades al interior de la clase obrera brasileña. Ello se explica por la caída del desempleo y, paralelamente, por la disminución de salarios. En efecto, si bien se observa un incremento considerable de los asalariados registrados, sus remuneraciones fueron las que menos crecieron. De acuerdo con datos oficiales, hacia 2003 el salario no registrado constituía alrededor del 60% del salario registrado, mientras que en 2013 llegó a representar el 80%. A medida que se incrementa el número de asalariados registrado, sus ingresos se aproximan a los salarios más bajos del mercado laboral, el que les corresponde a los obreros no registrados. Es sumamente importante considerar este aspecto, toda vez que la supuesta “disminución de las desigualdades” ha sido una de las principales banderas del PT durante sus campañas electoral.

En segundo lugar, es preciso incorporar a este cuadro el valor de la canasta básica total, puesto que permite echar luz sobre la capacidad de consumo de la que goza la clase

obrero brasileña. De acuerdo con el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), hacia 2013 un salario que permitiera cubrir los gastos de un trabajador y su familia -lo cual incluye alimento, vivienda, salud, educación, vestido, higiene, transporte, ocio y seguridad- debía situarse en \$R 2.621, un monto considerablemente menor al promedio de los ingresos que recibían los ocupados (alrededor de \$R 1.856,44). Como si ello fuera poco, el salario mínimo vigente en ese año (\$R 678) apenas representaba la cuarta parte de aquella suma. Ello pone en evidencia que la creación de puesto de trabajo durante los gobiernos del PT no ha supuesto una mejora sustancial de las condiciones de vida de la clase obrera, toda vez que el 95% de los nuevos asalariados registrados percibieron ingresos de hasta un salario mínimo y medio.

Cabe preguntarse, pues, ¿qué sucede cuando los ingresos de una familia no son suficientes para cubrir las necesidades básicas? Aquí es donde las transferencias desde el Estado pasan a jugar un papel importante, y con ello vuelve a cobrar fuerza la idea de la “distribución del ingreso”. En efecto, en el año 2011, el gasto social total en los principales rubros -que comprende planes sociales, educación, salud, seguridad social y vivienda- se llevaba alrededor del 18% del PBI. Además, vale señalar que en el período 2003-2011 se incrementó un 60% el gasto social por habitante. Este es un movimiento que acompaña el deterioro de los ingresos de la clase obrera. Dado que los bajos salarios son uno de los aspectos centrales de la economía brasileña, el gasto social del Estado se convierte en un elemento igualmente importante. Ahora bien, esta respuesta es limitada, puesto que solo reproduce a sus beneficiarios en condiciones de miseria. En este sentido, el Plan Bolsa Familias asistió a 13.179.472 familias en 2011, otorgando un beneficio promedio de \$R 122,65, un monto que se ubicó muy por debajo del salario mínimo vigente (\$R 545) y más aún de los ingresos que se requerían para cubrir la canasta básica total, que ese año promedió los R\$ 2.272,45.

Es importante llamar la atención sobre los últimos elementos que se han examinado, toda vez que se ha venido insistiendo en la emergencia de una “nueva clase media” en Brasil. Durante los últimos años, las modestas mejoras que se registraron en las condiciones de vida de los obreros han sido consideradas un auténtico proceso de ascenso social. No obstante, es preciso advertir dos importantes equívocos en este tipo de interpretaciones.

Por un lado, cabe señalar que el incremento del salario y la promoción de clase son dos fenómenos diferentes. Al margen de las mejoras que puedan percibir en sus salarios, los

obreros se verán obligados a vender su fuerza de trabajo, seguirán siendo explotados y, por lo tanto, no abandonaran su condición de clase. Por el contrario, el ascenso social es un proceso a través del cual un obrero pasa a ser propietario de medios de producción, y esto no es lo que ha sucedido en Brasil. En el año 2013, de acuerdo con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, la “clase media” estaba conformada por quienes percibían ingresos entre R\$ 291 y R\$ 1.019. Por consiguiente, dado que se definió una amplia brecha de ingresos y que solo se consideró el monto de los mismo, desde el gobierno se afirmaba que el 54% de la población brasileña formaba parte de esa clase.

Por otro lado, cabe destacar que no es claro el criterio a partir del cual se delimitó la pertenencia a la supuesta “clase media”. En efecto, como se ha indicado más arriba, hacia 2013 el DIEESE estimaba que una familia debía percibir R\$ 2.329 para poder cubrir sus necesidades básicas. Y como si ello fuera poco, el propio gobierno había establecido que el salario mínimo era de R\$ 680. Pues bien ¿Por qué alguien que percibe ingresos menores al salario mínimo es considerado parte de la “clase media”? ¿Por qué alguien que pasa a cobrar de R\$291 a R\$ 680 abandonaría su condición de clase?

Hasta aquí se han examinado algunos de los principales aspectos constitutivos del escenario económico y de las condiciones de vida de la clase obrera brasileña durante los gobiernos del PT. Se ha demostrado que las denominadas políticas de “distribución del ingreso” han encubierto la necesidad de contener a la población que no logra cubrir sus necesidades básicas. El aumento del gasto público orientado a la atención de sobrepoblación relativa es una tendencia que expresa la incapacidad del capital para permitir la reproducción normal de grandes fracciones de la clase obrera, tanto de la ocupada como de la desocupada. En este sentido, las políticas de transferencia de ingresos cumplen un papel central en la reproducción de la vida de esta población, aunque en condiciones miserables. Al mismo tiempo, operan como un subsidio a las empresas privadas, que pueden disminuir sus costos utilizando fuerza de trabajo más barata. Ahora bien, la mayoría de estas transferencias tienen como origen la deuda externa y los ingresos provenientes de las exportaciones de bienes primarios. Se utilizan para establecer alianzas con distintas fracciones de la clase obrera, pero entran en crisis ante cada contracción de las fuentes en las que abrevan. En momentos de estancamiento o recesión económica, el Estado encuentra dificultades para sostener estas transferencias y, por consiguiente, comienzan a implementarse los ajustes. Este es el origen de las

luchas que comenzaron a desarrollarse en el año 2013, las cuales pusieron de manifiesto el descontento de la clase obrera frente al proceso de precarización de sus condiciones de vida. A ello se sumaron las protestas contra los casos de corrupción que salieron a la luz, expresando el rechazo de la población al personal político que conducía al país. Y si bien el gobierno de Rousseff realizó concesiones frente a los reclamos iniciales, el ajuste prosiguió en su segundo mandato y se profundizó luego de la asunción de Temer.

La crisis política

Las “jornadas de junio” fueron una serie de protestas que tuvieron lugar en las principales ciudades de Brasil en el año 2013. Los reclamos iniciales expresaron el repudio frente al incremento de las tarifas del transporte, y luego derivaron en la exigencia mayor presupuesto para salud y educación pública. Además, las protestas manifestaron el descontento de la población con el gobierno y su rechazo frente a los fondos millonarios que el Estado estaba destinando a la organización de eventos como la Copa de Confederaciones (2013), el Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016). Las primeras movilizaciones se produjeron en los meses anteriores a junio, aunque fueron dispersas y no lograron congregarse grandes multitudes. Sin embargo, las protestas ganaron un apoyo mucho mayor a mediados de ese mes, luego de la gran represión que se descargó contra los manifestantes que se pronunciaron el día 13 en San Pablo. Además de las balas de gomas y los gases lacrimógenos utilizados por la Policía Militar, se registraron más de doscientos detenidos y alrededor de cien personas heridas. A partir de entonces, las protestas dieron un salto muy importante, puesto que se expandieron por todo Brasil y multiplicaron su capacidad de convocatoria. Las movilizaciones se sucedieron por varios días, cubrieron todos los estados del país - especialmente las ciudades más importantes- y reunieron cientos de miles de manifestantes. En la jornada del 20 de junio, día en el que tuvieron lugar las protestas más grandes de este mes, las movilizaciones convocaron alrededor de 2.000.000 de personas en casi 70 ciudades diferentes.

De acuerdo con una interpretación muy difundida, las movilizaciones habían estado motorizadas por la “nueva clase media” descontenta con el gobierno. No obstante, más arriba ya se ha cuestionado el valor de esta categoría y se ha demostrado que quienes pertenecen a este grupo social son obreros. Además, basta con analizar el contenido de los reclamos que se enarbolaron para echar por tierra la hipótesis de que las

movilizaciones fueron protagonizadas por la supuesta “clase media” brasileña. En efecto, las manifestaciones se originaron a partir de los aumentos de las tarifas del transporte público en diversas ciudades del país. Esto pone en evidencia el carácter obrero de las demandas, toda vez que son los trabajadores quienes usan mayoritariamente este servicio. Asimismo, es preciso considerar que también se exigió mayor presupuesto en salud, educación pública y vivienda, que se repudió la utilización de fondos públicos en la organización de mega eventos y que hubo pronunciamientos en contra de los desalojos forzados que se produjeron en las ciudades donde se celebraría los encuentros deportivos. Por último, en el marco del rechazo generalizado de la población frente a los casos de corrupción, vale destacar que otro de los ejes de las manifestaciones fue la Propuesta de Enmienda Constitucional 37/2011 (comúnmente denominada PEC 37), un proyecto mediante el cual las fuerzas de seguridad reforzaban su control sobre las investigaciones criminales, retirando las atribuciones con las que contaba el Ministerio Público para intervenir en los casos de delitos cometidos por funcionarios de gobierno.

Frente a esta ola de protestas, el gobierno buscó descomprimir la situación y se comprometió a escuchar los reclamos. La polémica PEC 37 fue rechazada por el congreso, con sólo nueve votos a favor. Asimismo, los aumentos de tarifas fueron revocados en muchas de las ciudades atravesadas por los conflictos. En Río de Janeiro, donde los pasajes de colectivos urbanos habían aumentado de R\$ 2,75 a R\$ 2,95, el alcalde anunció la revocación del incremento de tarifas. Las mismas decisiones se adoptaron en Minas Gerais y en San Pablo, donde el transporte público recuperó los precios que regían antes de las movilizaciones. En Porto Alegre, Recife, Pelotas, Cuiabá y Joao Pessoa también se anunció la reducción de tarifas. Aunque modestos, todos estos reacomodamientos constituyeron una primera victoria del movimiento.

Cabe señalar que todas las demandas que se levantaron corresponden con los intereses propios de la clase obrera. No obstante, a pesar de la cantidad de personas que convocaron, las protestas mostraron importantes limitaciones, toda vez que el contenido de las luchas solo expresó intereses secundarios de los trabajadores. Las manifestaciones fueron convocadas por el Movimiento Pase Libre (MPL) a través de las redes sociales. En su sitio web, este movimiento se presenta como una organización nacida en las universidades públicas de San Pablo, integrada por jóvenes, estudiantes, sindicalistas, anarquistas y feministas. Declaran ser un movimiento horizontal, independiente y a-partidario cuyo principal objetivo es la conquista de un sistema de

transporte público, gratuito y de calidad. A pesar de que se concentraron en una demanda puntual y de que eludieron las definiciones políticas, la organización tuvo la virtud de enarbolar un reclamo obrero concreto, lo cual le permitió unificar las luchas en torno a una consigna y obtener una victoria parcial. Ahora bien, el programa del MPL no supera el campo de los intereses secundarios de la clase obrera. Se opuso a los incrementos de los precios del transporte, pero no cuestionó el escenario en el cual se inscribió este problema ni comprendió que la revocación de los aumentos no constituye una solución de fondo. Y como si ello fuera poco, se opone tenazmente a la organización política de los obreros, los principales afectados por las medidas de ajuste. Ello limitó considerablemente el poder de las movilizaciones y, en última instancia, terminó favoreciendo al gobierno que supuestamente combatían.

A las movilizaciones protagonizadas por el MPL se sumó la lucha de los sindicatos. El 11 de julio, todas las centrales obreras convocaron a un “Día Nacional de Lucha” contra el proyecto de ley de regularización de la tercerización impulsado por Sandro Mabel, diputado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB), principal aliado del PT para entonces. De acuerdo con los sindicatos, con esta medida se buscaba regular y ampliar la tercerización, permitiendo que se extienda a cualquiera de las actividades realizadas por una empresa. En el marco de una huelga general, los sindicatos encabezaron importantes protestas, aunque su magnitud fue menor a la de las movilizaciones que se había desarrollado en junio. Las manifestaciones contaron con el apoyo los Trabajadores Sin Tierra (MST), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y los gremios docentes, quienes desde hace meses venían movilizándose por mejores condiciones de trabajo. Además del reclamo contra la tercerización, se rechazó la reforma política impulsada por el gobierno y se exigió una reducción de la jornada laboral de 44 a 40 semanales. Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Manaus y Río de Janeiro fueron algunos de los principales escenarios de conflicto. En San Pablo, la ciudad en donde las movilizaciones tuvieron mayor convocatoria, las concentraciones y marchas fueron acompañadas por cortes de calle que impidieron la circulación de los vehículos.

Las movilizaciones realizadas en el mes de junio y las huelgas sindicales de julio constituyeron un importante obstáculo al ajuste que se buscaba imponer. En el 2014, si bien las protestas disminuyeron y su capacidad de convocatoria fue menor a las del 2013, el nivel de movilización de la población siguió siendo importante. En relación con el 2010, 2011 y 2012, en el año 2014 se produjo una mayor cantidad de movilizaciones.

El carácter distintivo de los sucesos del 2013 se explica por el ajuste que se buscó implementara mediante el aumento de las tarifas del transporte, lo cual acentuó una tendencia que ya se venía registrando en los años anteriores. Por lo tanto, lejos de haberse producido una mera disminución de las protestas, en el 2014 se observa un fortalecimiento de las luchas, toda vez que las movilizaciones crecieron y su capacidad de convocatoria aumentó. Docentes, policías, metalúrgicos, trabajadores de la construcción, del sector salud y del transporte se movilizaron en búsqueda de salarios más altos y mejores condiciones laborales. A ellos se sumaron movimientos que se oponían al mundial de fútbol, usuarios de transporte público y sectores de la población sobrante que reclamaron mayor presupuesto para la construcción de viviendas, los servicios de salud y educación pública. Cabe destacar que la dirección de estas luchas ha sido una de sus limitaciones más importantes. Los principales referentes en las movilizaciones fueron el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), la Central Única de los Trabajadores (CUT) y Fuerza Sindical, organizaciones que han presentado una tendencia a morigerar sus demandas y a integrarse en el Estado.

En el año 2015, el descontento de la población creció, las movilizaciones aumentaron y nuevos reclamos se levantaron en las calles. La profundización del ajuste que impuso el gobierno de Dilma Rousseff fue resistida por el sindicalismo brasileño, incluso aquel sector que mantienen estrechos lazos con el PT, como la CUT. En efecto, luego de haber protagonizado una importante jornada de protestas en marzo, varias centrales sindicales – CUT, Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Intersindical, Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas) y Nova Central -convocaron a una huelga general para rechazar La Ley 4330, un proyecto que permitía ampliar la tercerización en las empresas y en el Estado. La medida fue convocada para el 15 de abril de aquel año, y contó con el apoyo de organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST), la Central de Movimientos Populares, el Frente de Lucha por Viviendas y la Unión Nacional de Estudiantes. En el marco de la huelga se produjeron importantes protestas en 30 ciudades del país, principalmente situadas en los estados de San Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Bahía.

Una de las fracciones obreras más movilizadas fue la del sector automotriz, la cual realizó importantes huelgas y manifestaciones contra las políticas patronales de despidos, retiros voluntarios, suspensiones y congelamiento de salarios. Por el contrario, en 2015 la fracción de la clase obrera que ha mostrado menos activación política fue la

población sobrante, sector que había tenido un peso sustancial en el último triunfo electoral de Dilma Rousseff.

Por su parte, luego de que la Operación Lava Jato comenzara a revelar información sobre los esquemas de corrupción en los que estaba involucrado el personal político brasileño, otro frente de conflicto se abrió en el país. En cientos de ciudades se produjeron gigantes protestas contra el gobierno y contra los partidos políticos en general. Al menos cuatro grandes movilizaciones sacudieron al país a lo largo del año, y cada una de ellas contó con una capacidad de convocatoria diferente. De acuerdo con las estimaciones de la policía brasileña, el 15 de marzo se movilizaron 2.400.000 personas, el 12 de abril 700.000, el 16 de agosto 870.000 y, finalmente, en lo que fue la jornada de menor envergadura, el 13 de diciembre salieron a las calles 83.000 brasileños. Los principales escenarios de conflicto fueron Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro y, especialmente, San Pablo. A pesar de que el tamaño de las movilizaciones no siempre fue el mismo, los reclamos predominantes en estas protestas fueron el pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, el rechazo a la corrupción dentro del gobierno y del conjunto de los partidos políticos.

A diferencia de las movilizaciones que se habían venido desarrollando, la cuales tenían como eje las demandas alrededor del problema del salario, los servicios públicos y las condiciones de vida más inmediatas de la población, las protestas que estallaron en el 2015 asumen un carácter diferente. Y estos nuevos reclamos levantados se correspondieron con un cambio en la dirección de las movilizaciones. En efecto, el principal referente de las protestas fue el Movimiento Brasil Livre (MBL), acompañado de Vem Para Rua, Revoltados ON LINE y otras organizaciones regionales de menor calibre, como Movimento Endireita Brasil (MEB). Todos estos agrupamientos convocaron a las movilizaciones contra el gobierno del PT y contra la corrupción política. De acuerdo con uno de los primeros comunicados oficiales del MBL, el objetivo principal de la organización era el respeto a la libertad, la justicia, las instituciones democráticas y al imperio de la ley. Allí se proclamaban consignas como la defensa de la libertad de prensa, el orden constitucional, la transparencia en la gestión pública, entre otras. En términos generales, según lo comunicaron, las otras organizaciones estaban motivadas por propósitos similares. El rechazo a la corrupción y la demanda de justicia se constituyeron en los principales reclamos de la nueva oleada de movilizaciones.

El 13 de marzo de 2016 tuvo lugar la última gran movilización de este tipo, aunque se diferenció de las anteriores por la poderosa capacidad de convocatoria que demostró. Las protestas se produjeron en al menos 240 ciudades y, de acuerdo con la policía militar, reunieron alrededor de 3.600.000 personas, lo cual la convirtió en la movilización más grande de la historia del país. Desde entonces, la magnitud de las protestas disminuyó y las luchas entraron en un profundo reflujo. Hubo que esperar un año para que la clase obrera brasileña vuelva a reaccionar masivamente a las políticas que se intentaban imponer en su contra.

Resulta pertinente destacar que la destitución de Dilma Rousseff tuvo lugar en el escenario que se ha intentado reconstruir. El trasfondo del *impeachment* fueron las gigantes movilizaciones que se produjeron contra la corrupción política y, paralelamente, contra el ajuste fiscal que impulsaba el gobierno del PT. Esto puso en evidencia la crisis política que se abrió en Brasil: el vínculo entre representantes y representados se quebró. La clase obrera demostró una poderosa capacidad de movilización contra personal político que la gobierna y que ataca sus condiciones de vida. En este sentido, la destitución de Rousseff no fue un “golpe de Estado”. En primer lugar, porque esta noción hace referencia a al desplazamiento de un gobierno por medios que escapan al marco legal vigente, y por lo general supone el quiebre del régimen político. Este no es el caso de Brasil. Los que impulsaron el juicio político contra la presidente son partidos constitucionales -como el PMDB y el Partido de la Social Democracia Brasileña-, que apoyan la democracia burguesa y que vienen gobernando Brasil desde hace años mediante acuerdos con el PT. En segundo lugar, cabe aclarar que el proceso de *impeachment* está contemplado por la constitución de ese país, y que ya tuvo lugar en 1.992, cuando se desplazó de la presidencia a Fernando Collor de Mello. Por último, la tesis de que en Brasil se produjo un “golpe institucional” es sumamente contradictoria, puesto que supone una acción ilegal y disruptiva que a la vez se ajusta a las normas del régimen.

Ahora bien, mientras Dilma resistió gigantes movilizaciones hasta que fue expulsada, durante el gobierno de Temer las protestas entraron en reflujo, y eso permitió que el PMDB se mantenga en el poder. Si bien la clase obrera ofreció una importante resistencia, el nuevo gobierno avanzó en la profundización del ajuste que exigía la burguesía. En este sentido, la gestión de Temer logró que se aprobara el congelamiento del gasto público y la reforma laboral, pero no obtuvo los mismos resultados en su intento de modificar el sistema previsional. Las movilizaciones de la clase obrera fueron

el principal obstáculo que se interpuso frente al avance de estas medidas. El 15 de marzo de 2017, más de 800.000 personas salieron a calles para rechazar la reforma del sistema jubilatorio, exigiendo el avance de las causas de corrupción y la salida inmediata del gobierno PMDB. Trabajadores estatales, bancarios, metalúrgicos, químicos y docentes se movilizaron en decenas de ciudades del país. Asimismo, el 28 de abril tuvo lugar una gigantesca huelga para rechazar las políticas del gobierno. La medida fue convocada por el conjunto de las centrales sindicales - Unidad Clasista, CUT, CSP/Conlutas, UGT, Fuerza Sindical, CTB, Nova Central-, aunque no todas llamaron a que los trabajadores se movilizasen. A pesar de ello, la huelga contó con el acatamiento de alrededor de 40.000.000 de obreros y, finalmente, las principales ciudades del país fueron cubiertas de movilizaciones y piquetes. Natal, Salvador, Recife, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, San Pablo y Belém fueron los escenarios de importantes protestas. Y dado los trabajadores de las principales ramas adhirieron a la medida, dentro de los cuales se encontraban obrero portuarios y del transporte, el país quedó virtualmente paralizado.

Por su parte, luego de que se conocieran los audios en los que Temer ordena el pago de sobornos a un director de la empresa JBS, se produjo otra importante movilización en Brasilia para pedir la salida del presidente. El 24 de mayo, alrededor de 35.000 personas fueron reunidas en una protesta convocada por CUT, Fuerza Sindical y varios movimientos sociales. El enfrentamiento con la policía se agravó y Temer terminó decretando la intervención del Ejército para reprimir las protestas. La decisión provocó controversias y críticas, incluso en las filas del propio gobierno. Y si bien estaba previsto que los militares ocuparan las calles hasta el 31 de mayo, el presidente tuvo que revocar su decreto al día siguiente. Frente a este escenario, el 5 de junio los dirigentes de todas las centrales sindicales confirmaron la realización de una nueva huelga general para el 30 del mismo mes. En esta ocasión, las centrales levantaron diferentes reclamos, pero ninguna de ellas se pronunció contra el conjunto del personal político brasileño. Mientras UGT y Fuerza Sindical convocaron a la huelga “contra las reformas”, la CUT adoptó la posición política del PT, puesto que se limitó a exigir la realización inmediata de elecciones (“Directas ya”). Finalmente, pese a haber contado con el apoyo del MST y el MTST, la huelga tuvo un impacto menor que la anterior. El principal obstáculo a su desarrollo fue que Fuerza Sindical y UGT, con importante representación en el transporte, no garantizaron la medida. Esto se produjo luego de que Temer prometiera que la reforma laboral no iba a afectar la contribución sindical obligatoria, uno de los

principales aportes que reciben los gremios por parte de todos los trabajadores registrados, independientemente de que estén afiliados o no. Con esta medida, el gobierno logró quebrar la unidad de las centrales sindicales y, en consecuencia, la huelga tuvo una fuerza considerablemente menor a la anterior.

Antes concluir, cabe destacar dos importantes aspectos del proceso que se ha expuesto. En primer lugar, es preciso señalar que pese a las huelgas y movilizaciones que se produjeron bajo el gobierno de Temer, las luchas de la clase obrera perdieron fuerza y entraron en reflujo. Como resultado de ello, la burguesía procedió a cerrar la crisis en su propio campo, lo cual se tradujo en el recambio de gobierno y en el enjuiciamiento de una buena parte del personal político. Las cámaras empresariales más importantes del país - la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), la Confederación Nacional de Industria (CNI) y la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA) - exigieron a Temer que adopte las políticas necesarias para que la economía brasileña retome su crecimiento. Esto significa que el respaldo de la burguesía al nuevo gobierno dependió enteramente de su capacidad para avanzar con la agenda de reformas y las medidas de ajuste. En este sentido, el segundo aspecto que cabe considerar es el reflujo en el que entraron las movilizaciones obreras, puesto que ello posibilitó la continuidad del nuevo gobierno y la imposición de las políticas que exigía la burguesía brasileña. Y la principal explicación de ese reflujo radica en la dirección política que se habían dado esas movilizaciones. En efecto, las protestas encabezadas por el MPL no trascendieron el campo de los intereses secundarios de la clase obrera, toda vez que solo se reclamaron mejoras en los servicios públicos. Asimismo, como se ha señalado más arriba, las movilizaciones organizadas por el Movimiento Brasil Livre (MBL), Vem Para Rua y Revoltados ON LINE se inscribieron en una línea política que solo se propuso combatir la corrupción y, por lo tanto, no superaron el terreno de las demandas democráticas y republicanas. Esta limitación también estuvo presente en las manifestaciones que encabezaron las centrales sindicales y las organizaciones como el Movimiento de Trabajadores sin Techo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, puesto que solo se denunció el supuesto “golpe” de Estado y se exigió la realización inmediata de elecciones. Por último, la intervención de los partidos del régimen solo constituyó un intento de capitalizar el descontento y utilizarlo oportunamente para conquistar posiciones o evitar el enjuiciamiento de sus miembros.

Conclusión

El presente trabajo comenzó con un breve análisis de los principales aspectos de la economía brasileña. Se identificaron las causas de su reciente crisis y se expuso cómo ello se tradujo en términos de políticas internas. Frente al fin del ciclo alcista de los precios de las commodities, que había constituido el principal impulso de la economía brasileña, el gobierno debió afrontar el agotamiento de una de las principales fuentes de recursos y, en consecuencia, decidió implementar un severo ajuste fiscal. Como respuesta a ello, y en reacción los casos de corrupción política que se conocieron, la clase obrera brasileña salió a las calles y protagonizó gigantes movilizaciones, poniendo de manifiesto las condiciones de miseria en las que se encuentra inmersa y el descontento que vive frente al enriquecimiento desmedido e ilícito de sus representantes. Se abrió, entonces, una profunda crisis política que evidenció la ruptura que se produjo entre los obreros y el personal político que gobierna Brasil. Ante este escenario, la burguesía intentó recomponer ese vínculo, apoyo los recambios en el gobierno y exigió la prosecución de las medias necesarias para que la economía brasileña retome su crecimiento. Y dado que las protestas mermaron y las luchas entraron en reflujo, la crisis comenzó a ser procesada en el propio campo de la burguesía, lo cual se tradujo en el enjuiciamiento y en la prisión de buena parte del personal político.

Bibliografía

Bil, D. (2016). Pies de barro. *El Aromo*, N°88.

Grimaldi, N. (2013). La contraofensiva. El gobierno de Dilma Rousseff frente a la movilización obrera. *El Aromo*, N°74.

Grimaldi, N. (2014). Un escalón arriba. *El Aromo*, N°79.

Grimaldi, N. (2014). Una política vacía. *El Aromo*, N°81.

Grimaldi, N. (2015). Acorralada. *El Aromo*, N°84.

Grimaldi, N. (2016). La verdadera farsa. *El Aromo*, N°92

Grimaldi, N. (2016). Todos son Dilma. *El Aromo*, N°90

Grimaldi, N. y Pezzarini, M. (2017). Caída libre La agudización de la crisis hegemónica en Brasil. *El Aromo*, N°96.

Grimaldi, N. y Pezzarini, M. (2017). Una oportunidad única. La debacle del sistema político en Brasil. *El Aromo*, N°96.

Harari, I. (2008). La alegría no siempre es brasilera. *El Aromo*, N°44.

Pezzarini, M. (2017). Una oportunidad única. La debacle del sistema político en Brasil. *El Aromo*, N°96.

Rodríguez Cybulski, V. (2013). Oscuras medallas. *El Aromo*, N°75.

Sleiman, V. y Genera, F. (2013). V de vinagre. El despertar de la clase obrera en Brasil. *El Aromo*, N°73.